

Las etnias hablan por la nación* (Bolivia: a propósito de los sucesos de octubre 2003)

MARIO MIRANDA PACHECO**

Terminada la guerra de independencia en lo que es hoy América Latina, la marginación y opresión de considerables comunidades étnicas y sectores sociales ingresó a una nueva fase: la formación de naciones modernas. En ese proceso inacabado —iniciado en tiempos de la Colonia e intensificado en el siglo XIX— el Estado poscolonial impuso diversas normas de exclusión y discriminación que hoy, a través de todos los medios, impugnan los pueblos originarios e indígenas. Al respecto, es ilustrativa la experiencia política de los últimos años en tres países del área andina (Bolivia, Perú, Ecuador), que tienen altas tasas de población autóctona. Desde esta perspectiva, me referiré de manera sucinta a algunos aspectos de la formación o creación/invencción de “la nación boliviana”, para luego comentar brevemente los sucesos de octubre del año 2003, que, a mi juicio, explican el desencuentro del Estado boliviano con las etnias del país, las cuales, a partir de entonces, hablan de “refundar” la república y plantean la urgencia de construir un Estado plurinacional.

I

¿Es América Latina un conjunto de naciones inventadas? Esta pregunta tiene su respuesta en el mundo de la historiografía. Connotados historiadores de América Latina señalan que las historias “oficiales” de la región descuidan asuntos altamente significativos para el conocimiento de nuestro pasado, que sin duda debe ser amplio y profundo para tener una visión más objetiva de los problemas del presente. En este señalamiento está implícita una crítica a la forma en que se escribe la historia “general” de los países de la región, usualmente subordinada al relato selectivo de hechos políticos notables.

* Las primeras anotaciones de este trabajo (que es parte de un proyecto de investigación), fueron leídas como ponencia en el Congreso Internacional “La nación en América Latina: de su invención a la globalización neoliberal”, organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Instituto de Investigaciones Históricas) y Universidad Nacional Autónoma de México (Colegio de Estudios Latinoamericanos. Fac. de Filosofía y Letras y Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos), Morelia, mayo 24 a 28, 2004. Para esta publicación, el autor ha introducido pocos cambios de redacción y ha incorporado información pertinente de acuerdo con los hechos políticos más significativos, ocurridos en Bolivia a partir de octubre del año 2003..

** Doctor en derecho constitucional por la Universidad de París, Francia. Profesor titular, nivel “C”, definitivo, tiempo completo (PRIDE “D”), en el Colegio de Estudios Latinoamericanos y la División de Estudios de Posgrado, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Premio Universidad Nacional 2007 en el área de Docencia en Ciencias Sociales.

Este modo de presentar el acontecer supuestamente exhaustivo de sociedades fincadas en raíces étnicas profundas, como son la mayoría de las nuestras, no refleja la importancia de otros factores sociales e históricos, sobre todo culturales, que tratados con criterios y métodos menos elusivos, explicarían nuestro presente con mayor objetividad.¹ Este importante señalamiento podría concretarse en otro, que concierne a la formación de las naciones a que estamos adscritos. A mi modo de ver, es en este horizonte donde se percibe una narración histórica parcial, incompleta, que suple o disimula sus carencias recogiendo ecos y resonancias de un pretérito activado por actores históricos hoy día perdidos en el olvido.

Los textos de enseñanza de historia de Bolivia registran resonancias de ese tipo, de manera particular en lo que corresponde a la participación y/o exclusión de naciones y pueblos originarios e indígenas en el proceso formativo de la nación y el Estado. Por cuidadoso que pudiera ser el relato de ese proceso *sui generis*, aparecen en los textos sólo ecos y resonancias menguadas de la sustantiva aportación étnica en el sostenimiento de la vida material de la sociedad, la defensa del territorio común y la perdurabilidad del ente nacional-estatal en el tiempo. Con estas fallas, los textos de la historia oficial de Bolivia informan más de la génesis y cambios institucionales del Estado republicano que de la nación, concepto equiparable a lo que representan la vigencia y vicisitudes de los pueblos que están bajo su soberanía. Para decirlo de otro modo, según el relato de esa historia, en la creación de la República de Bolivia, el Estado fue primero y después la nación. Este trastocamiento de categorías históricas y entidades políticas, al cabo de poco menos de dos siglos de historia republicana, induce a reflexionar detenidamente sobre los espacios específicos del Estado y la nación.²

La autodenominada “nación boliviana”, como todas las de América Latina, remite sus orígenes a la época colonial, tiempo en el cual su núcleo primigenio estuvo constituido por el conjunto de pobladores llegados de la península ibérica y de otras regiones del imperio español, a quienes se agregaron los nacidos dentro de dicho conjunto, sin importar que ellos hayan sido hijos sólo de los recién llegados, o de la mezcla de éstos con indígenas. Esos nuevos pobladores, según el origen de sus progenitores, se declaraban “españoles americanos”, “criollos”, “mestizos”, o simplemente “altoperuanos”.

Por su número poco significativo y por su ubicación en el ordenamiento social de la época, dicho conjunto representaba una exigua minoría en la totalidad demográfica del Alto Perú, hoy Bolivia. En tal sentido, la cepa original de la “nación boliviana” oficialmente reconocida —beneficiaria de diversos fueros y privilegios que la distinguían de los pueblos

¹ Germán Carrera Damas, historiador venezolano, anota diversas fallas en la historiografía de su país, las cuales, *mutatis mutandi*, se hacen extensivas a la tradición historiográfica de América Latina. Entre esas fallas señala como importantes: una periodización subjetivista, el descuido de las fuentes, ausencia de técnicas, falta de métodos y criterios (*Metodología y Estudio de la historia*, INCIBA, Caracas, 1969).

² El espacio del Estado es esencialmente político, construido con la lógica de su soberanía territorial y de su orden institucional, en tanto que el de la nación es un espacio histórico, que se expresa en la creación de un imaginario colectivo, el uso de una lengua común, las costumbres, el derecho consuetudinario. El traslape de un espacio con otro es causa frecuente de conflictos de distinto tipo, particularmente en lo que atañe a la autonomía cultural y regional que buscan los movimientos étnicos. Un caso de aplicación de “la justicia comunitaria” (derecho consuetudinario), sancionado como violatorio por el Estado boliviano, ha sido causa de una violenta huelga de vastos sectores aymaras en la región altiplánica del país. Estos hechos tuvieron repercusión en los sucesos de octubre de 2003.

originarios— ocupaba el lugar de una nacionalidad oprimida en la sumatoria de colonias españolas.³

Terminada la guerra de independencia (1809-1825), se institucionalizó el proceso de invención de la nación boliviana. El territorio ancestral del Kollasuyu —conocido como Alto Perú, o Real Audiencia de Charcas en la época colonial— cambió de nombre. En 1825, con la proclamación de la república, dicho territorio se denominó Bolivia. A partir de ese año, los criollos y un sector creciente de mestizos —protagonistas de la guerra de independencia— se apropiaron del gentilicio “bolivianos”, sin que los pueblos originarios e indígenas se sintieran afectados por este nuevo sello de adscripción política, no obstante el apoyo que brindaron a la movilización popular y a la mismísima guerra de independencia.⁴ Esto quiere decir que las circunstancias en que se libró dicha guerra condujeron a un pacto tácito e inevitable de convivencia en el territorio, pero no de igualdad, entre los pueblos originarios y la nueva etnia hispanoparlante, conformada inicialmente en la Colonia, emancipada en la guerra de todos contra el yugo colonizador y dominante en la era republicana.

Por entonces, el territorio del Alto Perú tenía una población aproximada al millón de habitantes. De esa población, sólo 10 por ciento no era india. El resto estaba repartido en numerosas etnias y nacionalidades, de las cuales, tanto por su milenaria presencia histórica y cultural, cuanto por el espacio geográfico que ocupan y por la decisiva importancia que tuvieron y tienen en la agricultura, la minería y en otras actividades de producción, las nacionalidades aymara y quechua, en el presente, son las más extendidas, las más numerosas y representativas. Sobre ese vasto tejido étnico, a lo largo del siglo XIX, en un marco contrastante de modernidad y atraso, sólo un décimo de la población dio forma y vigencia a la sedicente nación boliviana de hoy.

II

Para la república andina de Bolivia, creada en 1825, el siglo XIX representó un tiempo largo de inestabilidad política y económica; un siglo de repetidas invasiones extranjeras, guerras internacionales defensivas, cuantiosas pérdidas de territorio y enconadas luchas de facción que pusieron a prueba la existencia física e histórica de Bolivia como Estado y nación. Sin embargo, y por encima de esos hechos adversos, fue un siglo en el cual los bolivianos, con su nueva nacionalidad que fue y es algo más que una adscripción política y con el poder del Estado en sus manos, emprendieron el proyecto colectivo de conformar una nueva entidad histórica, la nación, “su” nación.

No obstante, en el proyecto de conformar o inventar una nación (como ocurre actualmente en distintas regiones del mundo, tanto con la descolonización dispuesta por la Organización de Naciones Unidas, cuanto con la desintegración de grandes y pequeños bloques de naciones, o con las guerras de liberación, movimientos étnicos, regionales, autonomistas, etcétera), sus miembros —originarios y adscritos— hacen todo lo que pueden para mantener sus víncu-

³ Jorge Ovando, *Sobre el problema nacional y colonial de Bolivia*, ed. Canelas, Cochabamba, Bolivia, 1961, p. 63.

⁴ Alipio Valencia Vega, *El Indio en la Independencia*, Ministerio de Educación y Bellas Artes, La Paz, Bolivia, 1962, pp. 227-235.

los naturales; pugnan de una manera u otra para afirmar un dominio territorial y construyen su imaginario que no es sólo una sublimación de posibilidades de la sociedad en que viven, sino expresión del conjunto de representaciones colectivas que generan ejes de tradición y solidaridad, mismos que cohesionan a la comunidad, proyectándola en la idea de duración prolongada e indefinida en el tiempo.

En el caso de Bolivia decimonónica, ese imaginario afirmó sus asideros en la libertad ganada con la guerra de independencia, trofeo que emblematiza el tránsito épico de la nacionalidad colonial oprimida al *status* pleno de una república independiente, dueña de un territorio rico y extenso (cerca de dos millones y medio de kilómetros cuadrados), dotado de abundantes recursos naturales y con numerosos pueblos proveedores de fuerza de trabajo. En suma, la nueva nación aparecía como una ex colonia española, erigida en términos de un Estado soberano, con un patrimonio recuperado por y para “los bolivianos” (*in abstracto*) mediante una guerra de sacrificio que había quebrado el yugo extranjero.⁵ Con tales divisas palmariamente épicas, racionalizadas en función de la trascendencia que se le podía dar a la insurgencia política y social de criollos y mestizos, la nueva nación estructuró sus propios rasgos constitutivos y sus relaciones sociales internas, sin que las elites republicanas de ese momento fundacional se preocuparan por una veraz y efectiva integración nacional con los pueblos originarios.

Bajo esa perspectiva, pero al margen de la retórica ilustrada a que recurrían los letrados de las clases dominantes, con los jalones formativos de la nueva nación fueron dándose modalidades más o menos drásticas de marginación étnica y de dominación social, económica, política y cultural sobre la totalidad de los pueblos indígenas y originarios. Los medios menos violentos pero de notoria eficacia fueron la discriminación cultural en función de ideas, valores y símbolos de la cultura occidental; el uso oficial y coercitivo del idioma español y la evangelización obligatoria. El conjunto de estos medios representaba la continuidad de un modelo colonial de marginación que había prevalecido durante tres siglos de dominación hispánica.

A su vez, entre los métodos drásticos se cuenta el trabajo rudo, las más de las veces gratuito, en el campo y la ciudad. El campo fue y es actualmente territorio ocupado por los pueblos originarios, en tanto que la ciudad es el espacio preferentemente habitado por la nación hispanoparlante. Esta oposición campo-ciudad muestra el grado de identidad de la población no india situada en un archipiélago de ciudades, asentadas en islas separadas por un mar étnico. A este método se agregaron otros: el despojo violento y la usurpación subrepticia o abierta de tierras poseídas inmemorialmente por las comunidades indígenas; la concentración de la propiedad de estas tierras en manos de latifundistas. Esto quiere decir que, agregadas al atraso y pobreza en que estaba sumido el complejo plurinacional y multiétnico del país, se establecieron drásticamente nuevas relaciones de producción y de poder para consolidar la nación boliviana no india, inventada con viejas reglas clasistas de dominación y con otras acuñadas recientemente por el colonialismo interno, secuela que arrastran las naciones poscoloniales.

El Estado republicano, mediante disposiciones legislativas y políticas pragmáticas del poder ejecutivo, reservó las opciones de progreso y desarrollo en favor de las clases pudientes

⁵ “Acta de independencia de las provincias del Alto Perú”, en Guillermo Lora, *Documentos políticos de Bolivia*, Ed. Los Amigos del Libro, La Paz, Bolivia, 1970.

de la nueva nación, cerrando estas vías a la inmensa mayoría étnica del país. Si se analizara esa situación recurriendo a conceptos actuales, diríamos que con ese método de marginación sistemática y rigurosa, el poder político de entonces configuró un modelo peculiar de *apartheid* andino, estructurado con actitudes y prácticas opresivas y racistas de los integrantes de la nueva nación.⁶ Los aparatos ideológicos del Estado, principalmente la escuela pública (inexistente en el campo), el ejército (represor de las masas indígenas), la iglesia reconocida oficialmente y otras instituciones como la judicatura y la policía, se encargaron de reproducir, ampliar y aplicar múltiples medidas de marginación étnica, no obstante las actividades básicas de la nación, particularmente la producción agrícola, la explotación de las minas, el transporte terrestre, el abastecimiento de las ciudades y de los centros urbanos en general, la construcción civil, las obras públicas de caminos y otras formas de participación en el mantenimiento de los servicios básicos y de la infraestructura de la sociedad, se asentaban en la fuerza de trabajo indígena.

Esto quiere decir que, para la historia oficial, la configuración de la nación boliviana no fue un proceso racional de integración e incorporación de sus componentes étnicos productivos y funcionales en el despliegue del Estado republicano, sino producto bien cuidado de una práctica de poder, orientada hacia la discriminación y la dominación global de la nueva nación, ejercida sobre cualquier otra etnia o agrupamiento humano.

En la medida en que la población minoritaria no india se miró a sí misma como dueña única e incontestable del país, procedió a identificarse con los atributos de una formación nacional solidaria para sus miembros y excluyente para los demás. Sobre esta base, sus elites, ancladas en la mentalidad retardataria del racismo colonial, difundieron con rapidez una falacia sin precedentes: los pueblos primitivos no tienen historia. En esta versión andina de una vieja tesis europea, con acentos racistas y lingüísticos, se leía: los pueblos que son sólo de indios y que no hablan el idioma español en Bolivia, ignoran las funciones institucionales del Estado y el significado identitario de la nación; por lo tanto, necesitan de leyes relativas a sus obligaciones de trabajo y obediencia. Con tales normas diferenciadas y segregacionistas, se reproducía la dicotomía colonialista del virrey Toledo: pueblo de blancos y pueblo de indios. Franz Tamayo, poeta boliviano,⁷ le dio a esta dicotomía una expresión metafórica perdurable.

En términos generales, el proceso en que se configuró la actual nación boliviana representa un ejemplo claro de la forma en que las funciones institucionalizadas del Estado fueron instrumentadas como fuerzas y normas estructurantes de la autodenominada nación boliviana. Para decirlo de otro modo, el Estado representó las posibilidades y el poder real de las clases dominantes, mismas que utilizaron este poder como instrumento “legal” de su dominación social, económica, política y cultural sobre la población originaria.

Dos fueron los momentos más significativos en los que el poder del Estado, en manos de terratenientes, militares, empresarios mineros y comerciantes asumió formas concretas de imposición clasista y étnica: uno fue en la década de 1830, cuando bajo el gobierno de Andrés de Santa Cruz se organizó el orden jurídico mediante la promulgación de diversos códigos franceses, traducidos de la legislación napoleónica, o españoles de tiempo anterior, para insertarlos en una sociedad compleja, atrasada y tradicionalmente comunitaria; otro fue en

⁶ Juan Albarracín Millán, *La sociedad opresora*, Emp. Editora Universo, La Paz, 1979, pp. 33-89.

⁷ Franz Tamayo, “Cuando el puñal ibero/ l’hubo transido,/ ese mundo agorero/ dio un alarido;/ Después pavora,/ y un estupor de siglos/ que aun dura, aun dura!”, *Scherzos*, Editorial Juventud, 1987, p. 279.

1880, momento en que fulguró el voto calificado como un trofeo cívico, negando el derecho de votar a las mujeres (que representan 50% de la población total del país), a los que no sabían leer y escribir (en un país con 70% de analfabetos), a los que no eran propietarios y no pagaban impuestos, esto es a la inmensa mayoría de población india y campesina.⁸

El uso del poder del Estado por las clases dominantes para inventar una nación implica el traslape de tres hechos estudiados en el análisis de la cuestión nacional y el Estado: uno, que la nación, desde todo punto de vista, ha sido y es un grupo humano estable, poseedor de un imaginario propio y unido por vínculos naturales (pensados como eternos), que le dan continuidad e identidad; dos, que la nación genera por sí misma complejos procesos de reproducción y diferenciación de relaciones sociales de poder; tres, que en una coyuntura de cohesión social —reconocida como un momento fundacional o constitutivo— la nación como grupo estable configura la base necesaria y trascendente para organizar el poder político bajo la forma de Estado nacional.

El traslape de estos pasos en el proyecto de crear/inventar “la nación boliviana” dio por resultado la construcción de una nación no india, excluyente y opresora, en la cual los vínculos que la unen no son naturales, lo que equivale a decir que no son eternos, sino creados en tiempos modernos saturados de colonialismo y que, por lo tanto, no abarcan a la totalidad de la población; por otra parte, la presencia de pueblos originarios se remonta a miles de años, por lo que el imaginario colectivo de la nación creada/inventada en el siglo XIX no es el imaginario de las etnias originarias. Finalmente, las relaciones de producción y de poder se circunscribieron al tejido interno de la etnia dominante no india sin otra relación con la población marginada que la de mantenerla en esa condición. Para decirlo de otro modo, la creación/invencción de la entidad oficialmente reconocida como “nación boliviana” deja en claro que la entidad construida por encima de los pueblos indígenas y originarios, sin incluirlos en su dirección y en su aparato administrativo, no llegó a ser Estado nacional.

El siglo XIX, atorado en el rezago feudal, terminó regido por una oligarquía integrada de terratenientes de viejo cuño colonial y “patriarcas de la plata”,⁹ potentados mineros del sur boliviano. En ese contexto, la explotación de un nuevo mineral, el estaño, produjo una crisis en la minería argentífera, ya venida a menos en el mundo de negocios mineros del país y en el mercado internacional. Esa coyuntura estimuló el estallido de la “revolución federal”, una verdadera y cruenta guerra civil entre conservadores del sur y liberales del norte, esto es, el enfrentamiento de la feudalidad rezagada del siglo XIX con el capitalismo en su fase imperialista del siglo XX.

Las masas aymaras del altiplano, con “el temible Willka”¹⁰ a la cabeza —esperando que la democracia pregonada por los liberales federalistas reconociera sus derechos y los incor-

⁸ Sobre los códigos promulgados por Andrés de Santa Cruz, Augusto Guzmán escribió: “Estos códigos, de concurrencia enciclopédica, fisonomizan el régimen jurídico boliviano al servicio de las capitales de departamento y provincia, hasta donde alcanzan las instituciones jurídicas. La población rural no tuvo que hacer nada con este régimen, excepto en el orden policario y penal, para soportar castigos por delitos evidentes o supuestos” (véase su *Historia de Bolivia*, Ed. Los Amigos del Libro, La Paz-Cochabamba, 1998, p. 126). El sufragio calificado se mantuvo en todas las constituciones políticas de Bolivia hasta 1952, año en que promulgó el voto universal. Cfr. Ramón Salinas Mariaca, *Las constituciones de Bolivia*, Imprenta Artística, La Paz, Bolivia, 1947.

⁹ Antonio Mitre, *Los patriarcas de la plata*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1981.

¹⁰ Ramiro Condarco Morales, Cfr. Zárate, *El temible Wilka, Historia de la rebelión indígena de 1899*, Talleres Gráficos Bolivianos, La Paz, 1966.

porara al funcionamiento estatal de la nación creada/inventada— decidieron la victoria de éstos sobre los conservadores. La memoria escrita registra que ésa fue la primera vez en que las etnias bolivianas hablaron de la nación que buscaban: una nación incluyente, libre, que no oprima ni excluya a nadie. No obstante, al cabo de esa guerra, los aymaras protagonizaron el último acto del drama boliviano de entonces como víctimas de la represión más dura de parte de los propios liberales.

III

La historia social de Bolivia, en particular la que se desarrolla con la explotación minera del siglo xx, ayuda a comprender los sucesos de octubre de 2003. En esa historia y en la de la guerra del Chaco están los antecedentes de solidaridad clasista y de identificación étnica que se manifestaron con mayor fuerza en los sucesos señalados. Repasemos algunos de dichos antecedentes.

A principios del siglo xx, cuando se iniciaba una nueva fase de explotación minera (esta vez del estaño) y con el partido liberal en el poder, el proceso de creación/invencción de la nación boliviana se puso al día, cumpliendo los requisitos de dependencia que aconsejó el imperialismo. Sobre esta base, los consorcios extranjeros impulsaron la formación de un Estado burocrático centralizado que, al asumir la representación y dirección de la nación oficial boliviana, creada e inventada en el siglo xix, reveló su ineficacia para proponer un desarrollo nacional independiente, así como para superar las diferencias étnicas de la población. Esto quiere decir que el Estado instrumentado por el poder imperial carecía de atributos para ser un verdadero Estado nacional.

En esa fase de la historia minera de Bolivia, las empresas mineras incorporaron a la producción a decenas de miles de trabajadores quechuas y aymaras que, saliendo de la servidumbre gratuita—inherente al feudalismo que prevalecía en el campo— ingresaban a un régimen salarial y contractual. Con las innovaciones tecnológicas que introdujeron las empresas, se expandieron las relaciones capitalistas de producción en la población étnica, aumentó la explotación de minerales en gran escala, surgió el proletariado minero y, con él, surgió también una nueva conciencia de clase dotada de un fuerte ánimo étnico.

Ese ánimo—notorio y vigoroso en el contexto imperialista de hace más de medio siglo— *mutatis mutandi* fue un componente ideológico fundamental en los sucesos de octubre de 2003. Para decirlo de otro modo, con ese ánimo se reprodujo la voluntad de recuperar una riqueza de la nación. Pero ¿cuál nación?, ¿la nación oficial, o la que aún no ha sido creada/inventada? A través de esta pregunta se hizo más notorio el desfase del Estado que representa a la nación oficial, creada/inventada en el siglo xix y que en la era de globalización acordó con las empresas transnacionales la explotación del gas y de otros recursos naturales del país.

La explotación de las minas, dominada por los consorcios imperialistas en el siglo xx, reprodujo en cierta forma el proceso de etnización¹¹ en la producción minera iniciado con los mitayos en el Cerro Rico de Potosí en 1544, que en 300 años de producción de plata, los so-

¹¹ Immanuel Wallerstein, *El capitalismo histórico*, Siglo XXI, México, 1989, pp. 66-70.

cavones del cerro se tragaron la vida de ocho millones de hombres-mitayos, sin que se conociera de ellos un mensaje de protesta. Cuatro siglos más tarde, es en los enclaves imperialistas donde la clase obrera de aymaras y quechuas denuncia el saqueo de los recursos naturales y afirma su lucha antifeudal y antimperialista.

La prueba mayor de la masa étnica proletarizada fue la insurrección de abril de 1952, que abrió las puertas de un proceso revolucionario. En la perspectiva histórica, los logros más importantes de ese proceso —nacionalización de las minas, reforma agraria, voto universal— representan el intento más radical que hubo en Bolivia para cambiar el diseño de la nación opresiva y excluyente, formada en el siglo XIX. Con la nacionalización de las minas, los trabajadores dejaron escuchar su voz para reivindicar el derecho de la nación sobre su riqueza minera, en ese tiempo el recurso natural más importante para la vida del país. Con la reforma agraria se abolió el latifundio; las comunidades indígenas recuperaron el derecho de propiedad sobre sus tierras; más de dos millones de peones agrícolas salieron de la servidumbre feudal y conquistaron su derecho de propiedad sobre la tierra que trabajaban.

Según la opinión de un historiador e ideólogo de la revolución nacional, esas conquistas “debían perpetuarse en los términos de una verdadera democracia, por el voto universal, único medio para entregar al pueblo el control pacífico sobre su propio destino”.¹² Hoy, después de más de medio siglo, esos logros revolucionarios perdieron su sentido social y étnico, quedando sólo como memoria desdibujada de la nación.

En 18 años de dictaduras militares (1964-1982), con breves intervalos democráticos, el país fue conducido a empujones hacia el neoliberalismo, mismo que fue finalmente instaurado *in toto* mediante el decreto 21060, paradójicamente promulgado en 1985 por Víctor Paz Estenssoro, caudillo de la revolución de 1952. El modelo de poder establecido mediante este decreto fue la piedra de toque en la crisis de octubre de 2003, situación en la que los sucesos, aunque distintos de lo acaecido en 1952, traducen en su esencia un fondo similar: la defensa intransigente de los recursos naturales y la participación de las etnias para rescatarlos como patrimonio nacional.

En los sucesos del año 2003 diversas fuerzas sociales del campo y de la ciudad asumieron la defensa de los hidrocarburos, cuya historia fue dramáticamente vivida en la tercera década del siglo pasado. En esos años, las mayorías indígenas y otros sectores populares fueron requeridos para su tributo de sangre en defensa de Bolivia, embarcada en una guerra con Paraguay (1932-1935). En esa conflagración, planteada inicialmente como una disputa por límites fronterizos, pero al final estimulada por poderosas empresas petroleras (la estadounidense Standard Oil Co. establecida en Bolivia y la angloholandesa Royal Dutch Shell, en Argentina y Paraguay), los indios aymaras, quechuas, guaraníes y de otros pueblos originarios hablaron nuevamente por la nación.

En ese sacrificio colectivo, el indio que —según la falacia racista difundida en el siglo XIX— no podía tener idea de nación, era el soldado que ofrecía su vida para defender el territorio frente al adversario y el petróleo frente a las compañías extranjeras. Esa guerra, más allá de los 50 mil hombres inmolados y la pérdida territorial de 120 mil kilómetros cuadrados, representa el acercamiento de la nación inventada a la nación real. En los hechos, propició la convivencia

¹² José Fellman Velarde, *Historia de Bolivia. La bolivianidad semicolonial*, Ed. Los Amigos del Libro, La Paz, 1970, tomo III, pp. 371-404.

de indios, mestizos y blancos, antecedente altamente significativo para que despertara una conciencia de unidad nacional y de desahucio del “antiguo régimen”¹³ en los no indios y en quienes llevaban el color de la piel, la sangre y la lengua aymara, quechua, o de otra etnia del país.

La mención de la presencia étnica en las minas de Bolivia, particularmente en las que fueron nacionalizadas en 1952 y el sacrificio de los pueblos originarios e indígenas en la guerra del Chaco, son episodios que conserva la memoria colectiva y contribuyen a la comprensión de los acontecimientos de octubre de 2003 porque, en gran medida, explican los vínculos de solidaridad entre etnia y clase, ejemplificados en la historia de “la guerra del gas”, librada en la ciudad de El Alto.

IV

Los sucesos de octubre de 2003 culminaron con el derrocamiento de un gobierno neoliberal y con el derrumbe estrepitoso de una multimillonaria venta de gas en beneficio y por cuenta de tres empresas transnacionales. Estos acontecimientos, en el plano de una explicación histórica, inducen a recordar que la nación boliviana —creada/inventada en el siglo XIX y representada por el Estado burocrático en la primera mitad del siglo XX— fue incorporada a los acuerdos de globalización por ese mismo Estado en la última década de dicho siglo.

Este señalamiento es útil para comprender que la eclosión política de octubre tuvo su motivación más fuerte en tales antecedentes históricos, ya que de otro modo no podría explicarse la voluntad colectiva de erradicar el neoliberalismo, cuyo modelo político y económico fue objeto de denuncia porque prolonga la dependencia y abre las puertas de un país periférico, como Bolivia, a la apropiación transnacional de sus recursos naturales.

Con la caída del gobierno neoliberal, surgió “la agenda de octubre”, cuyos puntos principales obligaron a que el nuevo gobierno presidido por Carlos Mesa se comprometiera a realizar un referéndum sobre el gas para definir la normativa del Estado en esta materia y a convocar a una asamblea constituyente para “refundar la república”. Las cosas no fueron tan sencillas como se suponía porque la victoria popular y étnica de octubre iba más allá de estos dos puntos decisivos en la historia actual de Bolivia y planteaba otros, tales como nuevas formas de la lucha de masas urbanas y étnicas que propiciaran el ascenso de nuevas fuerzas políticas al gobierno del país, como después se vio con la victoria electoral de Evo Morales, en diciembre de 2005.

La realización del referéndum tropezó con algunas dificultades. Por una parte, la suspicacia y el rechazo de algunas preguntas en distintos sectores urbanos y rurales. Lo que el pueblo pedía en 2003 era la nacionalización inmediata de los hidrocarburos, ése era el mensaje de los movimientos sociales a la nación entera. Por otra parte, la oposición a la consulta popular, liderada por experimentadas elites regionales que exigían que el gas y el petróleo fueran exportados a la brevedad posible y por cualquier vía. Sin embargo, y por encima de estas dificultades, el referéndum tuvo lugar el 18 de julio de 2004 y el gobierno de Evo Morales, sobre esa base, nacionalizó los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006.

¹³ Herbert S. Klein, *Orígenes de la revolución nacional boliviana. La crisis de la generación del Chaco*, Editorial Juventud, La Paz, 1968, pp. 212-214.

¿Por qué llamarle “guerra del gas” a esa eclosión insurreccional del mes de octubre? A enero de 2003 las reservas probadas y probables de gas en Bolivia ascendían a 54.9 trillones de pies cúbicos. Con esta cifra eran las mayores reservas nacionales de gas en el Cono Sur.¹⁴ Así, por la magnitud y el precio de este energético que aún está en el tapete de los negocios corporativos de la globalización, la llamada “guerra del gas” representa la defensa intransigente del recurso natural de mayor precio con que cuenta el país para su desarrollo, por lo que distintos sectores sociales y étnicos, en 2003, se propusieron impedir que las empresas transnacionales se lo arrebataren.

Las negociaciones secretas del gobierno con las transnacionales petroleras para la venta de este producto fueron tomadas por el pueblo como “una traición a la patria”. La indignación fue mayor en el momento en que se supo que el gas saldría por un puerto de Chile, mediando una cuantiosa inversión de miles de millones de dólares. ¿Qué explicación “patriótica” podía haber para entregar el gas a compañías extranjeras? ¿Por qué potenciar la economía de un país que le arrebató a Bolivia su salida al mar en una guerra de conquista y que, como siempre, había rechazado toda negociación al respecto? Tales fueron las preguntas del pueblo que avivaron “la guerra del gas”, orientada hacia los objetivos de frustrar la política neoliberal y de expulsar del poder a un gobierno entregado a las transnacionales petroleras.

La “guerra del gas” tuvo su centro operativo en El Alto, localidad que en su corta historia de cuarenta años ha creado nuevas tradiciones de solidaridad social y étnica. La población aymara, mayoritaria desde los tiempos en que fue un modesto poblado, la ha convertido en centro vital y coordinador del movimiento étnico. Sus habitantes, que son en elevado porcentaje ex trabajadores de las minas nacionalizadas en 1952 y de otras industrias privatizadas o desmanteladas por el neoliberalismo, aportaron su experiencia de lucha obrera y sindical.

Durante los sucesos de octubre, El Alto fue escenario de represión política y también nudo del cerco de La Paz y del bloqueo de caminos en el área altiplánica. Del 11 al 17 de octubre esta ciudad ha sido noticia en los medios de comunicación mundial. Allí, en ese lugar mencionado en las guías de turismo como “el aeropuerto más alto del mundo”, a más de 4 mil metros de altura sobre el nivel del mar, se definió una batalla decisiva para Bolivia entre un gobierno instrumentado por las empresas petroleras y los movimientos sociales que le dieron a su acción combativa el sello híbrido de clase y etnia. Con esta insurrección, las multitudes aymaras de El Alto y los pueblos originarios de todo el país hablaron por una nueva nación incluyente, democrática, y por un Estado soberano y multinacional, que defienda las riquezas del país para que éstas sean patrimonio de todos, indios y no indios.

V

Por último, y a manera de resumen, anotaré algunos aspectos complementarios sobre la formación histórica de Bolivia y los sucesos de octubre.

1. En Bolivia se reconocen oficialmente 36 formaciones étnicas, mencionadas en el proyecto de Constitución Política como “pueblos y naciones”.¹⁵ De estas formaciones, cinco

¹⁴ Véase Carlos Miranda Pacheco, *¿Podemos exportar gas natural?*. Fundación Milenio, La Paz, 2003, p. 14.

¹⁵ Véase “Proyecto de CPE del MAS”, *La Razón*, La Paz, 17 de agosto de 2007, suplemento, artículo 3.

son las más importantes: aymara, quechua, chiriguana, chiquita y moxeña, asentadas en distintas áreas geográficas del país y poseedoras de lengua, economía y cultura propias. En los hechos, todos estos agrupamientos étnicos —subordinados al Estado republicano en que se formó la nación oficial boliviana— conllevan las consecuencias de su marginación, atraso y explotación, inherentes al colonialismo interno, sin que el mestizaje biológico de siglos pasados y el de la época actual, palmariamente cultural o simbólico, modificaran el fondo de esta situación.

2. Las naciones y pueblos originarios de Bolivia, a través del tiempo, tuvieron una presencia histórica y cultural indiscutible, oscurecida en dos sucesivas dominaciones, la colonial y la republicana. La nación oficial boliviana —inventada como fueron otras naciones que tienen pueblos originarios y mayorías indígenas— exhibe su artificiosidad moderna desde el momento en que es representada por el Estado burocrático centralizado, herencia del siglo xx, mismo que como sujeto contractual arriesga en la globalización el destino de los recursos naturales de todo el país. Esta artificiosidad —léase pseudoidentidad— es la que impugnaron las etnias de Bolivia con voz propia, irradiando su discurso desde la ciudad de El Alto.

3. En el desarrollo de esos sucesos se enfrentaron dos lógicas. De un lado, la lógica globalizadora, impuesta a través de la apropiación transnacional de los recursos naturales; del otro, la lógica de los países periféricos, cuya viabilidad histórica está ligada al destino de sus recursos naturales. En este enfrentamiento se borraron las diferencias étnicas y se hizo lúcida la necesidad de defender intereses genuinamente nacionales. Esto quiere decir que la insurrección de octubre reflejó en gran forma una singular acumulación de fuerzas que probaron su capacidad para enfrentarse a las fuerzas represivas, bloquear caminos, paralizar actividades urbanas y rurales, coordinar funciones cívicas, entre otros hechos que pueden ser leídos como expresión concreta de esta nueva amalgama de clase social y etnia, manifiesta en forma de masa dotada de poder, y también pueden entenderse como ejercicio de futuras acciones masivas, orientadas al logro de otros objetivos relacionados con la constitución de un nuevo tipo de entidad estatal-nacional.

4. Los cambios que genera la globalización en la sociedad, la política, la economía y la cultura —fondo imponderable de las motivaciones genuinas del movimiento étnico— inciden fuertemente en la formación de nuevos conceptos de nación, poder y Estado. Los hechos de El Alto revelaron una nueva estrategia de masas destinada a lograr la participación de pueblos originarios, naciones y etnias en las decisiones cruciales del país, particularmente en lo que corresponde a la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales.

5. En ese contexto, las etnias y naciones en Bolivia —de manera particular los aymaras— hablan por una nación que ellas pueden construir, llevando a la práctica un modelo de democracia étnica, lo que equivale a plantear un proyecto histórico tan válido como el de una democracia burguesa o socialista, o de otra adjetivación centrada en el sujeto, o los sujetos históricos que la estructuren, representen y dirijan. No se trata de una utopía arrancada de la imaginación, sino de una propuesta racionalizada de solución en el laberinto de contradicciones que desquician el tejido social y político de una nación inventada.

6. A mi juicio, los sucesos de octubre representan un parteaguas firme y claro en la etapa posmoderna de creación/invencción de la nación oficial boliviana. Quienes analicen su causación histórica, tendrán que referirse a ellos. Su desenlace ha dejado un cúmulo de problemas difíciles y dramáticos. Hoy día el país se ve amagado por graves conflictos, unos derivados de la discusión de la nueva constitución política con la que se “refundará” la república; otros,

creados por ciertas elites regionales —que aferradas a la tradición de la ya obsoleta nación inventada o al espejismo que generan las transnacionales— no dudan en aventurarse y poner en vilo la suerte de un país secularmente defendido por sus pueblos originarios, dueños legítimos del territorio que habitan y de los recursos con que les ha dotado la naturaleza.

En suma, la confrontación entre una nación inventada para perpetuar la marginación y opresión de considerables formaciones étnicas y sociales y otra nación que puede forjarse sobre la base de vínculos naturales y estables, ya se ha dado en Bolivia. Y las etnias hablaron por esta última nación en los sucesos de El Alto. A mi juicio, esos sucesos, por su trascendencia, representan un nuevo punto de partida para que los bolivianos construyan su verdadera nación.